LAS COACCIONES LABORALES: LOS PARRAFOS 2.º Y 3.º DEL ARTICULO 496 DEL CODIGO PENAL

Javier MIRA BENAVENT
Profesor de Derecho Penal

S U M A R I O :

- I. INTRODUCCION.
- II. EL MARCO SOCIO-POLITICO DEL NACIMIENTO DE LOS NUEVOS TIPOS DEL ARTICULO 496.
- III. EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO.
- IV. LA CRITICA DE LOS NUEVOS TIPOS:
 - 1. Valoración Constitucional.
 - 2. Consideraciones de «lege ferenda»: el reciente artículo 177 bis del Código Penal.

I. INTRODUCCION

El párrafo 2.º del artículo 496 del Código Penal, al tipificar aquellas conductas consistentes en obligar a otras personas a través de la violencia o intimidación a iniciar o continuar una huelga, paro o cierre empresarial, pretende delimitar penalmente uno de los conflictos laborales más importantes: el fenómeno de la huelga.

La huelga ha sido definida por los especialistas en Derecho laboral como «un rechazo colectivo y concertado del trabajo, manifestando la intención de los trabajadores de situarse provisionalmente fuera del contrato, a fin de asegurar el éxito de sus reivindicaciones»⁽¹⁾; se trata, pues, de un fenómeno de *actuación colectiva*, de tal manera que cuanto mayor sea el número de trabajadores que secunden la huelga, mayores posibilidades de éxito tendrán éstos en la defensa de sus intereses frente al empresario. Del carácter colectivo que caracteriza a este medio de presión obrera se deriva, como contenido esencial del derecho de huelga, la posibilidad, más bien la necesidad, de que los trabajadores que hayan optado por el ejercicio de este derecho fundamental para defender sus intereses intenten conseguir que todos aquellos implicados en el conflicto laboral se unan a la huelga; entran en juego, entonces, los llamados *piquetes*, es decir aquellos grupos de trabajadores que ejercen, una vez declarada la huelga, la función de informar y dar publicidad de los motivos que la han originado y, al mismo tiempo, intentar convencer y extender la decisión colectiva a todos los trabajadores implicados en el conflicto: en una palabra, los piquetes tratan de *persuadir* a los demás trabajadores para que se sumen a la huelga⁽²⁾.

En este orden de cosas, los nuevos tipos adicionados al artículo 496 intentan delimitar penalmente esa acción de persuasión de los piquetes de trabajadores en huelga, incriminando aquellos casos en los que estos acudan a la violencia o intimidación; sin embargo, a pesar de que aparentemente sea esta la razón de ser de los nuevos tipos, su verdadera función en el ordenamiento punitivo es otra muy distinta, como así lo demuestra el estudio del momento histórico en que nacieron y del bien jurídico protegido. Por tanto, el objeto del presente trabajo no será el tratar de señalar dónde empieza y dónde acaba penalmente la acción lícita de los

piquetes⁽³⁾, ni tampoco el estudio de los elementos de los nuevos tipos⁽⁴⁾, sino que la tarea propuesta es la de denunciar la verdadera finalidad con que nacieron estos tipos, y que, como se verá, no es otra que la de obstaculizar o dificultar el recurso de los trabajadores a la huelga como medio de presión en los conflictos colectivos; de esta forma, los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496 constituyen una situación anómala en la protección penal de los derechos fundamentales de la persona, desde el momento en que la Constitución de 1978 reconoce como tal en su artículo 28.2 «el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses».

Para llevar a cabo el trabajo propuesto se ha creído conveniente, como ya se ha apuntado, realizar en primer lugar un estudio de la coyuntura socio-política que introduce las coacciones de tipo laboral en el Código Penal; seguidamente se abordará el tema del bien jurídico protegido en los nuevos tipos para intentar descubrir cuáles son los valores o intereses que realmente se tratan de tutelar; y finalmente, con estos presupuestos como base, se acometerá la crítica, no sólo jurídico-penal, sino sobre todo constitucional, que merecen los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496.

II. EL MARCO SOCIO-POLITICO DEL NACIMIENTO DE LOS NUEVOS TIPOS DEL ARTICULO 496.

La Ley 23/1976, de 19 de julio, sobre modificación de determinados artículos del Código Penal relativos a los derechos de reunión, asociación, expresión de las ideas y *libertad de trabajo*, añadió dos nuevos párrafos al artículo 496 con el siguiente tenor literal:

«Incurrirán en las penas de arresto mayor en su grado máximo y multa de... los que actuando con violencia o intimidación, en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, obliguen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, paro o cierre empresarial».

«Serán castigados con la pena de prisión menor los que, actuando en la forma prevista en el párrafo anterior, fueren ajenos al conflicto o portaren armas o instrumentos peligrosos».

Según la Exposición de Motivos de la Ley, la introducción de los nuevos párrafos obedece a un intento de contrarrestar «la presencia y la creciente actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga, y que maltratan o intimidan a los trabajadores...»; sin embargo, a pesar de tal declaración, para comprender exactamente el sentido y la finalidad de los nuevos párrafos del artículo 496 hay que recordar la coyuntura socio-política en la que se fraguó esta reforma del Código Penal (4 bis).

La Ley de 19 de Julio de 1976 fue la consecuencia en el ámbito penal de otras dos Leyes que acababan de ser aprobadas recientemente: la Ley 17/1976, de 29 de mayo, reguladora del derecho de reunión y manifestación, y la Ley 21/1976, de 14 de junio, sobre asociaciones políticas; una vez en vigor estas dos leyes se hacía urgente la reforma de los preceptos penales que hasta ese momento habían regulado la materia objeto de modificación, toda vez que en dichas leyes se establecía que debían considerarse ilícitas y no permitidas aquellas reuniones, manifestaciones y asociaciones políticas tipificadas como tales en el Código Penal; para acomodar, pues, la legislación punitiva a la nueva regulación de los derechos de reunión y asociación política surgió la reforma de 1976, circunstancia que, además, fue aprovechada para introducir los nuevos párrafos del artículo 496 que aquí se estudian.

Toda esta actividad legislativa puede ser encuadrada en lo que por aquel entonces recibió el apelativo de «apertura política», y que no era más que un intento de perpetuar el régimen franquista acomodándolo a las nuevas necesidades políticas y sociales originadas tras la muerte de su creador mediante una serie de reformas que, aunque muy ruidosas y efectistas, no alteraban en lo más mínimo los presupuestos básicos del sistema⁽⁵⁾: se trataba, utilizando una expresión gráfica, de lavarle la cara al sistema. En este orden de cosas, la finalidad perseguida al introducir los nuevos tipos penales del artículo 496 del Código no era otra que la defender la estrecha concepción que el régimen franquista tenía de los conflictos colectivos y, en especial, de la huelga que, sin bien no estaba prohibida penalmente en todos sus aspectos^(5 bis), era meramente tolerada por las autoridades gubernativas siempre que los huelguistas observaran toda la

extensa serie de limitaciones impuestas por el Real Decreto Ley de 22 de mayo de 1975 sobre conflictos colectivos que la reducían a un instrumento ineficaz para las reivindicaciones laborales⁽⁶⁾; por tanto, al ser considerado el recurso a la huelga como algo excepcional, aunque no prohibido, los nuevos párrafos añadidos al artículo 496 permitían perseguir penalmente, bajo una pretendida tutela del derecho al trabajo, a aquellos trabajadores que trataran de incitar a otros a la huelga: es decir, se perseguía a los llamados piquetes de «*extensión*» de huelga, que además, normalmente, solían estar constituidos por aquellos trabajadores integrados en las organizaciones sindicales entonces clandestinas, quedando por esta vía obstaculizada su actividad en los conflictos colectivos.

Los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496 constituyen, pues, la respuesta del régimen a la cada vez más tensa situación político-laboral que se vivía en las postrimerías del estado franquista: la creciente presión del movimiento obrero condujo a crear unos tipos nuevos y agravados de coacciones en vez de aplicar los ya existentes⁽⁷⁾. Además, la extrema sensibilidad del Régimen, reaccionario ante cualquier cuestión político-laboral que cayera fuera de sus coordenadas, se pone de manifiesto con la constatación de varios hechos significativos:

1. Por lo que se refiere a su colocación sistemática dentro del Código Penal, las nuevas figuras sufrieron muchas vacilaciones: El Consejo de Ministros en el que se acordó la remisión a las Cortes del anteproyecto de Ley de reforma del Código Penal incluía los nuevos tipos de coacciones ejecutadas por piquetes entre los delitos de terrorismo y tenencia de explosivos (Capítulo XII del Título II del Libro II)⁽⁸⁾; semejante proposición no llegó a cuajar, aunque siguió discutiéndose su colocación. Para el Procurador Díaz-Llanos, las nuevas figuras de piquetes debían incluirse entre los *desórdenes públicos* en un nuevo artículo 247 bis, o en todo caso en un nuevo párrafo del artículo 222 (*Sediciones*), pues, para este Procurador, si las nuevas figuras se añadían como párrafos 2.º y 3.º del artículo 496 la competencia para conocer el delito, y eso era lo que según él había que evitar, correspondería a las Audiencias Provinciales, mientras que si se ubicaban entre los desórdenes públicos o entre las sediciones el fallo competiría al Tribunal de Orden Público⁽⁹⁾; en esta misma línea incluso se llegó a preguntar a la ponencia (tal era en aquel momento el trasfondo

emocional del tema) si los nuevos tipos de piquetes se aplicarían para reprimir las huelgas protagonizadas por estudiantes o profesores en los centros docentes⁽¹⁰⁾.

2. La Ley de 19 de julio de 1976 sobre modificaciones de determinados artículos del Código Penal contiene una considerable reducción de las penas correspondientes a los nuevos tipos reguladores de los derechos de reunión, manifestación y asociación; sin embargo, esta reducción de penas no alcanzó a la tipificación de las nuevas coacciones ejecutadas por piquetes, sino que, por el contrario, su penalidad se agravó respecto del tipo principal de coacción del párrafo 1.º del artículo 496.

3. El Real Decreto-Ley de 25 de enero de 1977 suprimió con carácter general la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multas impuestas por actos contrarios al Orden Público contenida en la Ley de Orden Público; sin embargo, la Disposición Transitoria del Decreto-Ley preveía (y esto es lo significativo) que esta medida no se aplicaría durante el plazo de un año a las multas impuestas por actos contrarios al orden público que causen daños a establecimientos comerciales o de otro tipo, así como «a los que supongan coacciones para otras personas, ya consistan en obligarlas a realizar actos distintos a los queridos o a impedirles hacer lo que la Ley no prohíbe», aclarándose en el Preámbulo del Real Decreto-Ley que se trata de coacciones, «especialmente en su modalidad de piquetes, cualesquiera que sea su naturaleza». La Disposición Transitoria del Decreto describe la conducta de forma casi idéntica a como se hace en el tipo básico de coacciones del párrafo 1.º del artículo 496 del Código Penal; por ello, resultaba curioso, y así lo observó BOIX REIG, que cuando lo que fundamentalmente se pretendía era sancionar las coacciones en su modalidad de piquetes, deseo expresado en el Preámbulo del Decreto, se describiera la conducta de forma similar al citado tipo básico de coacciones, sin hacerse ninguna alusión al tipo específico de piquetes, es decir, a la conducta expresamente tipificada para tal fin en los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496 del Código⁽¹¹⁾; de cualquier modo, concluía el autor citado, se trataba de conductas que, de realizarse, constituirían un delito tipificado en el artículo 496 del Código Penal, por lo que la Disposición Transitoria del Decreto de 25 de enero de 1977 contenía una grave limitación del principio «non bis in idem»⁽¹²⁾.

4. Y finalmente, por lo que respecta a los aspectos procesales del tema, el Real Decreto-Ley 3/1979, de 26 de enero, sobre protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 3.5.º establece la aplicación, en todo caso, de las normas de procedimiento del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (del procedimiento de urgencia para determinados delitos) a las causas seguidas por los delitos comprendidos en los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496 del Código Penal (coacciones cometidas por piquetes).

Aparte de la situación de inconstitucionalidad que supone la vigencia de este Decreto-Ley al vulnerar el principio de reserva de Ley orgánica existente en materia penal⁽¹³⁾, el sometimiento de las causas seguidas por los delitos tipificados en los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496 del Código Penal al procedimiento de urgencia regulado en los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a las reglas contenidas en el propio Decreto-Ley constituye una medida altamente criticable fundamentalmente por dos motivos: A. En primer lugar, porque comporta la aplicación de un procedimiento especial y extraordinario a una serie de delitos «sociales» frecuentemente perseguidos, como es el caso, entre otros, de la actuación violenta de piquetes, que no suelen ser cometidos por bandas o grupos organizados y armados (terroristas, que es a quienes el R. D. L. pretende perseguir), por lo que resulta desproporcionado que se apliquen a los piquetes las medidas restrictivas de las garantías jurisdiccionales contenidas en dicho decreto, como son la limitación de los recursos contra los actos y providencias dictados por los Jueces de instrucción o centrales (art. 6) o la posibilidad de decretar la prisión provisional incondicional, aunque el delito tenga señalada pena inferior a la de presidio o prisión mayores (art. 5)⁽¹⁴⁾; B. Y en segundo lugar, porque, como dice ARROYO ZAPATEIRO, la figura contenida en el artículo 496.2 del Código Penal ha sido incluida, por obra del Real Decreto-Ley 3/1979, de 26 de enero, entre aquellos delitos de persecución preferente y primordial integrándose así «en el programa de acción prioritaria de las fuerzas de seguridad, ¡junto al terrorismo y los robos!»⁽¹⁵⁾. De esta manera, continúa diciendo el mismo autor, el artículo 496.2 cumple una función anti-huelga que no descansa en su tenor normativo, sino que se deriva del Decreto-Ley citado, porque «la combinación del delito especial y de la norma procesal extraordinaria viene a criminalizar de facto a lo piquetes de trabajadores en huelga en ge-

neral, y no sólo a los coactivos», convirtiéndose en un verdadero obstáculo para el libre ejercicio del derecho fundamental de huelga; sobre esta base, no es extraño que los cuerpos de seguridad del Estado estén facultados para actuar en el interior de las empresas en las que se ha declarado una huelga, pues basta una denuncia del empresario indicando la posibilidad de daños en las instalaciones para provocar, sin más comprobaciones, una intervención policial; con posterioridad, «los trabajadores detenidos permanecen horas o días en tal condición hasta ser entregados a la autoridad judicial, quien ante la inexistencia de hechos punibles les pone de inmediato en libertad. El daño a la acción organizativa y, en consecuencia al contenido esencial del derecho fundamental resulta, sin embargo, irreparable»⁽¹⁶⁾.

III. EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO

El tema del bien jurídico protegido cobra especial interés cuando se le otorga una función de defensa y conservación de un orden establecido de intereses, cuyo equilibrio se considera indispensable para la supervivencia de un grupo social; no es extraño, pues, que se acostumbre a definir el bien jurídico protegido como un «valor» que merece la protección más fuerte de que dispone el ordenamiento jurídico: la protección Penal. Ante la perturbación de uno de estos valores básicos, el bien jurídico aparece como «nódulo» o corazón del delito, pues ofrece un criterio material sumamente decisivo en la interpretación y construcción de la teoría del delito y, por tanto, de los tipos penales en particular⁽¹⁷⁾. Se impone, por tanto, la determinación y el descubrimiento de aquellos valores o intereses a los que sirve de cobertura la nueva figura regulada en el párrafo 2.º del artículo 496 del Código Penal⁽¹⁸⁾.

La Exposición de motivos de la Ley 23/1976, de 19 de julio, justificaba la introducción de los nuevos párrafos adicionados al artículo 496 en base a que la actividad violenta o intimidatoria de los llamados piquetes de extensión de huelga constituye «no sólo una ofensa a la *libertad de trabajo*, sino también al mismo derecho de huelga, que descansa en la libertad personal del trabajador», suponiendo, «sin duda, un ataque a la seguridad de

los trabajadores»; estas afirmaciones, la semejanza estructural de las nuevas figuras con el tipo genérico de coacción y su ubicación final (después de muchas discusiones) en el artículo 496 (Cap. VI, Tit. XII, delitos contra la libertad y seguridad), son razones que pueden inducir a pensar que el bien jurídico protegido en estos tipos específicos de coacción es la «libertad laboral o de trabajo» del propio trabajador, opinión mantenida abiertamente por algún autor, como HIGUERA GUIMERA⁽¹⁹⁾; de respeto a la «libertad de trabajo» de los trabajadores que no quieran sumarse a la huelga habla también el artículo 6.4 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo; en la misma línea, los trabajos parlamentarios de la Ley de 19 de julio de 1976 demuestran cómo se repetía insistentemente que el bien jurídico protegido en las figuras de nueva creación era el «derecho al trabajo»⁽²⁰⁾, aunque algún Procurador llegó a decir que las actividades de los piquetes constituían una «actuación atentatoria para la economía»⁽²¹⁾.

Sin embargo, a pesar de todo esto, el propio tenor literal del párrafo 2.º del artículo 496 se opone a que el bien jurídico protegido en esta infracción sea el «derecho al trabajo», debido a que sólo se incriminan aquellas conductas consistentes en obligar a otros, con violencia o intimidación, a «*iniciar o continuar*» una huelga o paro; pero cuando se obliga a otro a «*iniciar o continuar*» una huelga, no se le está obligando únicamente a abandonar el trabajo, sino también a que participe *activamente* en la defensa de los intereses obreros, toda vez que la huelga implica necesariamente una participación *activa* en el conflicto y no una mera cesación de la actividad laboral: el huelguista, pues, no es el que no trabaja, sino el que hace la huelga, el que deja de trabajar para presionar al empresario⁽²²⁾. Bajo esta perspectiva, cuando un piquete obliga a un trabajador a iniciar o continuar una huelga lo que está lesionando es el derecho de este último, no a trabajar, sino a no hacer la huelga, a no participar activamente en la acción reivindicativa que toda huelga conlleva: estamos ante un conflicto surgido entre huelguista y no huelguista.

En conclusión: el bien jurídico protegido por el artículo 496.2 del Código Penal no es el «derecho al trabajo», sino el «derecho a no realizar la huelga», a no intervenir activamente en ella⁽²³⁾; y es importante llegar a esta

conclusión, pues la doctrina especialista ha denunciado la utilización, desde una perspectiva conservadora, del «derecho al trabajo» en contra del derecho a la huelga, sobre todo en aquellos países donde este último derecho no viene reconocido a nivel constitucional; de esta manera, «el derecho al trabajo se lanza indistintamente contra los sindicatos y las huelgas, amparando a quienes desean trabajar a pesar de la distinta voluntad del sindicato (cláusulas de seguridad sindical) o de los partidarios de la huelga»⁽²⁴⁾; la conclusión es, pues, importante para, como ha dicho RAMIREZ MARTINEZ, contraatacar intentos reaccionarios o «políticamente indecente» (en terminología de MANCINI) de vaciar el «derecho al trabajo» de su original contenido izquierdista y subversivo para el sistema (derecho a disponer y conservar un puesto de trabajo) y darle un contenido de derechos, al menos en parte (protección, también, de los no huelguistas)⁽²⁵⁾.

Por otra parte, que el artículo 496.2 del Código Penal protege *única y exclusivamente* el derecho a no realizar una huelga se deriva de su propio tenor literal, pues como ha advertido MUÑOZ CONDE, sólo se castiga a los que obliguen a otras personas a «iniciar» o «continuar» una huelga, pero no a los que «impidan» a otras personas a declararse en huelga; aquellos casos en los que, mediante violencia o intimidación, se impida el ejercicio o la continuación del derecho de huelga caen fuera del ámbito incriminatorio del párrafo 2.º del artículo 496, gozando únicamente de la protección genérica otorgada por el tipo básico de coacciones del párrafo 1.º del mismo artículo⁽²⁶⁾.

De todo lo anterior se concluye, en mi opinión, que la introducción de los dos últimos párrafos del artículo 496 ha supuesto lo que MUÑOZ CONDE llama una «perversión del concepto de bien jurídico»⁽²⁷⁾; para este autor, la elevación a categoría de bien jurídico, es decir, de valor respetable y que hay que respetar, de determinadas ventajas e intereses del grupo o clase dominante que no tienen un valor fundamental para los restantes miembros de la comunidad, «es una forma evidente de mantener el “status”, de reaccionar frente a todo lo que signifique progreso y de conservar a toda costa la actual situación; de este modo se abusa del Derecho Penal como sistema de represión en defensa de algunas minorías dominantes...»⁽²⁸⁾.

En mi opinión, pues, lo que realmente protegen los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496, mediante la tutela formal del derecho a no hacer la huelga, son los intereses particulares del grupo social que detenta el poder económico en nuestra sociedad, y ello en base a los siguientes argumentos: *en primer lugar*, el derecho a la huelga del trabajador no se protege aquí en todas sus manifestaciones, pues significativamente sólo se castiga, como ya se ha dicho, a los que obliguen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, pero no a los que impidan a otras personas declararse en huelga; en definitiva, se protege el derecho a no estar o a no hacer la huelga, lo cual sólo puede beneficiar a una de las partes del conflicto colectivo.

En segundo lugar, estos tipos agravados de coacción nacen en un momento histórico en el que algunas minorías dominantes podían ver en peligro su poderío económico y político ante una nueva concepción de la sociedad que por entonces comenzaba a consolidarse; de esto y de los intentos de esas minorías por conservar su posición privilegiada ya se ha hablado en el epígrafe anterior.

En tercer lugar, el propio HIGUERA GUIMERA ofrece otro argumento encuadrable en esta línea, pues al plantearse quién es en definitiva el que sufre los perjuicios patrimoniales en orden a determinar la responsabilidad civil nacida de estos delitos, llega a la conclusión de que sería el propio empresario quien sufriría el detrimento patrimonial, al no recibir la contraprestación de los trabajadores que han iniciado una huelga como consecuencia de la coacción de los piquetes^(28 bis).

En cuarto lugar, que los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496 se introdujeron en el Código Penal para proteger determinadas ventajas e intereses de un grupo o clase dominante se deriva de la propia formulación típica del precepto, que, como ha dicho ARROYO ZAPATERO, permitía, toda vez que resultaba fáctica y políticamente imposible reprimir a la generalidad de los huelguistas, «actuar selectivamente contra los sindicalistas, que son quienes ordinariamente constituyen los piquetes y por los que las autoridades gubernativas del momento entendían no los violentos, sino todo grupo de dirigentes de un conflicto, los organismos de coordinación del mismo, o de información, desplazados a otros centros de trabajo»⁽²⁹⁾; tales afirmaciones descansan en el propio tenor literal del precepto, como se

desprende de la constatación de dos hechos significativos: A. El párrafo 2.º del artículo 496 requiere, como exigencia típica indispensable para el nacimiento de la infracción, que se actúe «en grupo, o individualmente *pero de acuerdo con otros*», sin duda con la finalidad de reprimir con mayor dureza únicamente aquellas acciones de huelga que estén organizadas o coordinadas, organización y coordinación que en la mayoría de los casos (por no decir en todos) corresponde a las organizaciones sindicales (por tanto, aquellos piquetes que actúen individualmente o fuera de un acuerdo u organización, normalmente sindical, reciben un trato privilegiado al poderseles aplicar únicamente el párrafo 1.º del artículo 496, que comporta una pena más benigna)⁽³⁰⁾; y B. Una de las dos causas de la agravación de la pena contenidas en el párrafo 3.º del artículo 496 consiste en que los autores «fueren ajenos al conflicto»; si se tiene en cuenta que por «ajenos al conflicto» se entendía, como lo sigue entendiendo la doctrina más tradicional⁽³¹⁾, a aquellos que no pertenecen a la empresa o sector económico afectado por el paro, huelga o cierre empresarial, se podrá comprobar, como ha puesto de relieve ARROYO ZAPATERO, que «el precepto se dirigía específicamente contra los entonces denominados «activistas», que no son otros hoy que los miembros del sindicato que participa en la huelga»⁽³²⁾.

Y por último, en este orden de cosas, hay que hacer una referencia a las coacciones al cierre empresarial, cuya introducción en el párrafo 2.º del artículo 496 obedece, en opinión de ARROYO ZAPATERO, «a una mixtificación de la igualdad de trato ante la ley de obreros y patronos en relación a los fenómenos de la huelga y el cierre»⁽³³⁾; para este autor, «el que se tutele tan sólo al empresario frente a las coacciones para que inicie o continúe un cierre patronal, y no para que mantenga abierta o proceda a la apertura de la empresa (por ejemplo, cuando haya recurrido al «lock-out»), pone de manifiesto aún más el sin sentido material y político-criminal del precepto»⁽³⁴⁾.

IV. LA CRITICA DE LOS NUEVOS TIPOS.

Una vez llegado este punto, y asumiendo todo lo dicho hasta el momento, se puede abordar ya con una cierta base la crítica que merecen los

nuevos tipos introducidos en el artículo 496 del Código Penal, procediendo en primer lugar a efectuar su valoración Constitucional, para seguidamente acabar formulando una serie de consideraciones de «lege ferenda» y una breve mención al reciente artículo 177 bis.

1. *Valoración constitucional.*

Ya hemos visto en el epígrafe anterior que el bien jurídico protegido en los nuevos tipos de coacciones ejecutadas por piquetes es el «derecho a no hacer la huelga» y que, lo que en definitiva se plantea en el seno de los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496 del Código Penal es un conflicto entre el huelguista y no huelguista, entre el derecho a hacer la huelga y el derecho a no hacerla; por lo tanto, para formular un juicio de constitucionalidad sobre los nuevos tipos deberá comprobarse previamente cómo valora la Constitución de 1978 ambos derechos.

Respecto al derecho a hacer la huelga, la Constitución lo recoge expresamente como un derecho fundamental en su artículo 28.2.º, cuando establece que «se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses». Más problemático resulta encontrar el reconocimiento constitucional del derecho a no hacer la huelga; según RAMIREZ MARTINEZ, el derecho a no hacer la huelga que tiene el no huelguista únicamente puede encontrar reconocimiento constitucional, a modo de libertad sindical «negativa», en el último inciso del artículo 28.1.º de la Constitución («Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato»), en base a que cuando se obliga a un trabajador a participar en una huelga, se le obliga a participar en la actividad básica del Sindicato, por lo que «se le está obligando a actuar como un sindicato más, a pertenecer “de hecho”, ya que no “de derecho”, al Sindicato»⁽³⁵⁾.

Aun admitiendo, a pesar de lo forzado del argumento, que el derecho a no hacer la huelga encuentre protección constitucional como libertad sindical «negativa», habrá de convenirse que, a pesar de ello, tal protección es menos enérgica que la otorgada al derecho a hacer la huelga; en efecto, como el mismo RAMIREZ MARTINEZ reconoce, el ordenamiento constitucional no valora por igual ambas conductas: 1) Porque el derecho a la huelga se protege expresamente (art. 28.2.º), mientras que el derecho a no

hacer la huelga no se protege de un modo expreso sino sólo implícitamente en el párrafo 1.º último inciso de dicho artículo 28; y 2) Porque según el artículo 10.2.º de la Constitución, los derechos y libertades reconocidos en la norma fundamental deben aplicarse de acuerdo con los acuerdos y tratados internacionales, que en esta materia son los Convenios 87 y 98 de la O. I. T., Convenios que contemplan expresamente la libertad sindical positiva, pero que no contienen referencia expresa alguna a la libertad sindical negativa⁽³⁶⁾.

Por lo tanto, si nos atenemos a lo dicho, se puede concluir que el sistema de protección arbitrado por el Código Penal en esta materia es totalmente injustificado, desde el momento en que se otorga una mayor tutela al «derecho a no hacer la huelga»; en efecto, mientras que los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496 (arresto mayor en su grado máximo y multa o, incluso, prisión menor) son aplicables a aquellas conductas consistentes en obligar a otro a iniciar o continuar una huelga o paro, las consistentes en impedir iniciar o declarar una huelga, es decir, aquellas que limiten el ejercicio del derecho a hacer la huelga, únicamente pueden ser subsumidas en el párrafo 1.º del artículo 496 (arresto mayor y multa): en definitiva, el Código Penal otorga una protección común al derecho a hacer la huelga (art. 496.1.º) y una protección privilegiada mediante unos tipos específicos y agravados al derecho a no hacer la huelga (art. 496, 2.º y 3.º)⁽³⁷⁾.

Concluyendo: como ha dicho ARROYO ZAPATERO, «el nuevo precepto invierte directamente el orden constitucional de valores y derechos y opera generando desigualdad de trato legal en una doble medida», pues «la desigualdad no radica sólo en que se protejan desigualmente bienes “iguales”, sino en que se protege más al de menor valor»⁽³⁸⁾; tal circunstancia, y el hecho de que se trate de un precepto legal de origen anterior a la Constitución de 1978, llevan al citado autor «a resolver el conflicto en base a la disposición derogatoria tercera del texto fundamental: el precepto contenido en el artículo 496.2.º, se opone—materialmente—a lo establecido en la Constitución (art. 14, en relación con el artículo 28.2.º) y, en consecuencia, debe estimarse derogado por la misma, efecto jurídico éste para cuya apreciación están legitimados los jueces ordinarios»⁽³⁹⁾.

2. Consideraciones de «*Lege ferenda*»: el reciente artículo 117 del Código Penal.

Dada la inconstitucionalidad de los nuevos tipos introducidos en los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496, cualquier consideración posible acerca de su futuro deberá pasar necesariamente por su desaparición del Código Penal.

En efecto; ya hemos visto que, los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496, tal y como están redactados, únicamente son congruentes con un ordenamiento jurídico-laboral que considere la huelga como una mera libertad tolerada por las autoridades y no como un auténtico derecho atribuido a los trabajadores para la defensa de sus intereses; es decir, en un marco legal en el que, a pesar de estar tolerada la huelga, se valore más el hecho de no usarla. Esta concepción de la naturaleza jurídica de la huelga era la que se traslucía del Decreto-Ley de 22 de mayo de 1975 sobre conflictos colectivos, vigente cuando se introducen los nuevos párrafos del artículo 496, y que, bajo la pretendida atribución de un «derecho subjetivo» de huelga, en realidad regulaba un modelo «procedente» de huelga sometido a un extenso catálogo de limitaciones formales, materiales y procedimentales que reducían notablemente su operatividad en el marco de los conflictos colectivos⁽⁴⁰⁾; en esta misma línea, los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496 venían a restringir en el ámbito penal cualquier intento de extensión «improcedente» de la huelga. En resumen: las numerosas limitaciones contenidas en el Decreto-Ley de 22 de mayo de 1975 sobre conflictos colectivos de una parte, y los nuevos tipos agravados introducidos en el artículo 496 del Código Penal de otra, convertían «de facto» a ese «derecho subjetivo» de huelga, que el citado Decreto-Ley pretendía consagrar, en un instrumento prácticamente ineficaz para las reivindicaciones laborales⁽⁴¹⁾.

Pero es que además, y en ello estriba lo paradójico del caso, los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496 ni siquiera cumplen adecuadamente su función restrictiva del derecho de huelga, debido a que la finalidad agravatoria que preside la creación de los nuevos tipos de piquetes resulta frustrada, como se pone de relieve con la constatación de dos circunstancias que, obviamente, pasaron desapercibidas a la hora de efectuar la controvertida reforma de 19 de julio 1976, pero que ponen de relieve la imperiosa

necesidad que hubo entonces por reprimir estas conductas de incidencia político-laboral⁽⁴²⁾:

1. A diferencia de las coacciones comunes del párrafo 1.º del artículo 496, que sólo admiten la violencia, las coacciones realizadas por los piquetes de «extensión» de huelga pueden ser cometidas indistintamente tanto por violencia como por *intimidación*, con lo cual queda zanjada en este punto, por voluntad expresa del legislador, la debatida cuestión acerca de la inclusión o no de la intimidación en el término «violencia» empleado en el citado párrafo 1.º del artículo 496; sin embargo, no fue esta la finalidad perseguida con la admisión de la intimidación en el párrafo 2.º del artículo 496 (pues de haber sido así, se hubiera aprovechado la ocasión propiciada por la reforma para modificar también en el mismo sentido el párrafo 1.º, que es precisamente donde se plantea el mencionado problema hermenéutico), sino que, por el contrario, tal admisión obedece sin duda al deseo de ampliar con ánimo agravatorio el ámbito incriminatorio del tipo de injusto de las coacciones cometidas por piquetes de huelga. Ahora bien, si admitimos con la doctrina más reciente⁽⁴³⁾ que todo supuesto de intimidación encierra una amenaza, y que por ello debe reconducirse siempre al ámbito del delito de amenazas condicionales y nunca al de coacciones, resultará que en aquellos casos en los que una persona emplea la intimidación para vencer la voluntad ajena, y tal intimidación consista en el anuncio de un mal que constituya delito, lográndose finalmente el objetivo perseguido, habrá de aplicarse el tipo de amenazas condicionales del artículo 493.1.º, que establece una pena de *prisión menor*; en consecuencia la ampliación efectuada en el ámbito incriminatorio del párrafo 2.º del artículo 496 al admitir la intimidación *ha venido a beneficiar* a aquellas personas que a través de la misma obliguen a otras a iniciar o continuar una huelga, paro o cierre empresarial, supuestos a los que la reforma de 1976 asignó sólo la pena de *arresto mayor* en su grado máximo⁽⁴⁴⁾.

2. Si admitimos, como hace MIR PUIG⁽⁴⁵⁾, que en aquellos casos en los que varios sujetos son coaccionados por una sola conducta externa se origina siempre un concurso real de delitos y en ningún caso el ideal, y estableciendo el párrafo 2.º del artículo 496 una solución expresa para los casos en que los piquetes coaccionen a la huelga a una pluralidad de tra-

bajadores, resultaría que, como ha observado el mencionado autor, la reciente reforma «no vendría precisamente a agravar, sino generalmente a atenuar el tratamiento de los piquetes de huelga, ya que por ella se convierten en delito único las distintas infracciones cometidas sobre los diferentes sujetos. Resultado éste seguramente no querido por el legislador, sino consecuencia (una más) del escaso rigor con que se acometen las reformas penales en nuestro país, aunque en este caso pueda resultar favorable desde la perspectiva política opuesta a la que inspiró la reforma»⁽⁴⁶⁾.

La concepción de la huelga latente en los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496 del Código Penal choca frontalmente, por tanto, con el ordenamiento jurídico-laboral del nuevo Estado Democrático, desde el momento en que la Constitución de 1978 configura el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos (art. 28, 2.º, sección 1.ª del Capítulo II del Título I). Por ello la función anti-huelga que cumplen los párrafos 2.º y 3.º en combinación con el Real Decreto-Ley 3/1979, de 26 de enero, sobre protección de la seguridad ciudadana, es de todo punto incompatible con la función que debe cumplir la huelga en un orden jurídico-social de tipo democrático, y que, como ha dicho RAMIREZ MARTINEZ, no es otra que la de medio para un fin: «la superación de las desigualdades o la remoción de los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran»⁽⁴⁷⁾: en esta línea, el artículo 28.2.º de la Constitución configura la huelga como un derecho instrumental, es decir, como un medio para llevar a cabo el amplio programa de reforma económica, política y social que la propia norma fundamental se fija para el logro de una democracia real y no sólo formal⁽⁴⁸⁾.

Todo lo dicho hasta el momento pone de relieve la falta de adecuación del tratamiento jurídico-penal de los piquetes de huelga a los preceptos constitucionales, y por lo tanto la ya denunciada inconstitucionalidad de los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496: en consecuencia, dichos párrafos deben desaparecer del Código Penal. En realidad, como ha puesto de manifiesto MUÑOZ CONDE, la tipificación de las coacciones realizadas por piquetes era *innecesaria*, pues las conductas que sanciona el párrafo 2.º del artículo 496 son perfectamente subsumibles en el tipo de coacciones co-

munes del párrafo 1.º⁽⁴⁹⁾, y de hecho así lo entendía la Jurisprudencia antes de la reforma de 19 de julio⁽⁵⁰⁾. Ahora bien, la aplicación del tipo de coacciones genéricas a las conductas violentas de los piquetes, consecuencia de la desaparición sin más del Código Penal de los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496 (dado que no existe en nuestro ordenamiento penal ningún tipo específico aplicable a aquellas conductas que impidan a otro a iniciar o continuar una huelga), es una solución que no satisface, porque supondría otorgar idéntica protección tanto al derecho a hacer la huelga como al derecho a no hacerla: es decir, a bienes jurídicos a los que, como ya se ha visto, la Constitución no valora de igual manera.

En mi opinión, la reforma de este tema debe pasar necesariamente por dos puntos: En primer lugar, es necesario que se supriman, por su inconstitucionalidad, los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496, con lo que aquellas conductas consistentes en obligar violentamente a otros a iniciar o continuar una huelga caerían en el ámbito incriminatorio de las coacciones comunes del artículo 496.1.º; y en segundo lugar, se debería crear un tipo específico que sancionara cualquier intento de limitar o impedir el ejercicio del derecho de huelga consagrado en el artículo 28.2.º de la Constitución. De esta forma se otorgaría una protección especial al derecho a hacer la huelga y una protección común o genérica al derecho a no hacerla, única manera de respetar el orden constitucional de valores que se señaló en el epígrafe anterior.

La reciente reforma Urgente y Parcial del Código Penal de 25 de junio de 1983, que ya ha entrado en vigor, ha introducido una importante modificación en materia de protección penal del derecho a la huelga, intentando adecuar en este punto el Código Penal a la Constitución; la citada reforma introduce un nuevo artículo 177 bis que protege expresamente el derecho de huelga:

«Los que impidieren o limitaren el ejercicio legítimo de la libertad sindical o del derecho de huelga serán castigados con la pena de arresto mayor y multa de 3.000 a 300.000 pesetas».

La colocación sistemática de este precepto es acertada, puesto que este artículo está ubicado en la Sección Primera del Capítulo II del Título II del Libro II del Código (Delitos cometidos por los particulares con ocasión

del ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las Leyes), pues el derecho de huelga, junto con el de libre sindicación están reconocidos en el artículo 28 de la Constitución entre los derechos fundamentales de los ciudadanos (Sección 1.ª del Capítulo II del Título I). A pesar de ello, la reciente reforma del Código Penal merece, por lo que respecta al tema que aquí nos ocupa, una doble crítica: 1. Ha olvidado suprimir los inconstitucionales párrafos 2.º y 3.º del artículo 496; y 2. Ha asignado al artículo 177 bis tan sólo la pena de arresto mayor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas, con lo que el derecho a no hacer la huelga sigue gozando de una protección superior (arresto mayor en su grado máximo y multa de 30.000 a 300.000 pesetas o incluso prisión menor: artículo 496.2.º y 2.º) a la otorgada por el artículo 177 bis al derecho a hacer la huelga.

Para acabar baste una breve mención al Proyecto de Código Penal de 1980, de cuyo articulado desaparecen las coacciones realizadas por piquetes de trabajadores; en efecto, su artículo 192 regula sólo el tipo de coacciones comunes de forma similar a como lo hace el vigente artículo 496. 1.º. Sin embargo, el grupo parlamentario de Coalición Democrática presentó una enmienda proponiendo un artículo 192 bis que merece ser destacada:

«Quien con ocasión del ejercicio del derecho de huelga durante conflictos laborales ocupase total o parcialmente, sin autorización del propietario o representante y, en su caso, de la autoridad o funcionario competente, bienes privados o públicos no previstos para el ejercicio del derecho de reunión en la forma y tipo previstos en las leyes serán castigados con multa de dos a cuatro meses y arrestos de tres a seis meses».

«Si la ocupación se produce con violencia en las personas o fuerza en las cosas la sanción se impondrá en grado superior y además con la suspensión de funciones de dos a cuatro años cuando se realice con funcionarios públicos».

«Cuando la coacción se ejerciere para impedir o limitar *la libertad de trabajo* con violencia en las personas o fuerza en las cosas, con ocasión de la pretendida defensa del derecho de huelga se impondrán las penas superiores en grado a las aludidas en el párrafo primero de este artículo».

Esta enmienda es significativa tanto en su contenido como por la opción política que propugnan sus firmantes, lo que permite encuadrarla en la línea que sobre el tema se ha intentado trazar en el presente trabajo.

NOTAS:

(1) La definición es de SINAY, citada por OJEDA AVILES, A., en «Derecho Sindical», Madrid 1980, p. 276.

(2) Véase, por ejemplo, OJEDA AVILES, A., «Derecho Sindical», cit. p. 271; y RAMIREZ MARTINEZ, J. M., «Huelga y cierre patronal en la Constitución Española», en el libro homenaje al profesor Bayón Chacón, Madrid 1980, p. 463.

(3) En este sentido, véase el reciente artículo de ARROYO ZAPATERO, L., «Los piquetes de trabajadores en huelga y el delito de coacciones tras la reforma de 1976», en Comentarios a la legislación penal, Tomo II (El Derecho Penal del Estado Democrático), Madrid 1983, pp. 441 y ss.

(4) Un estudio aséptico de los elementos del tipo de coacciones laborales en HIGUERA GUIMERA, J. F., «El delito de coacciones», Barcelona 1978, pp. 256 y ss.; y en RODRIGUEZ DE VESA, J. M.^a, «Derecho Penal, Parte Especial», 8.^a edic. Madrid 1980, pp. 287 y ss.

(4 bis) Sobre la reforma de 1976 en particular, puede verse GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A., «Asociaciones ilícitas en el Código Penal», Barcelona 1977; y del mismo autor, «Asociaciones ilícitas y terroristas», en Comentarios a la legislación Penal, Tomo II (el Derecho Penal del Estado Democrático), Madrid 1983, pp. 109 y ss.). En estos dos artículos se contiene un extenso índice bibliográfico sobre la materia.

(5) Es más, la clave de la supervivencia del régimen franquista durante más de tres décadas estriba precisamente en la habilidad del sistema para acomodarse «a los avatares y cambios que en el interior y el exterior se sucedieron durante tan extenso período, pudiéndose hablar, no sin razón de franquismos, en plural» (BARBERO SANTOS, M., «Política y Derecho Penal en España», Madrid 1977, p. 90). En este sentido, resultan significativas las palabras del entonces Ministro de Justicia, que, al presentar al Pleno de las Cortes el Proyecto de Ley de modificación del Código Penal sobre derecho de reunión, Asociación y libertad de trabajo, después de haber hablado sobre la modificabilidad de las leyes cuando así lo exigían las circunstancias, acabó diciendo: «Los hombres de mi generación que no hayan aprendido esta lección de prudencia política, después de las experiencias vividas y sufridas, *es que no han aprendido nada*» (Diario de Sesiones del pleno del día 9-6-1976, n.º 27, p. 119).

(5 bis) El Código Penal sólo penaba, como delito de sedición en el artículo 222, aquellas huelgas que atentaran contra la seguridad del estado; de ahí que, como seguidamente veremos, algún procurador intentase incluir los nuevos tipos de piquetes en el artículo 222 y no en el 496.

(6) Véase DURAN LOPEZ, F., «Derecho de huelga y legalización del conflicto de clases», publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1976, pp. 142 y ss.

(7) La maniobra, por lo demás, no era nueva, pues ya el Código Penal de 1928 incluyó en su seno unos tipos especiales de incidencia en el mundo laboral, que fueron consecuencia, al igual que los nuevos párrafos del actual artículo 496, del temor de la Dictadura de Primo de Rivera ante las crecientes reivindicaciones sociales y que la condujo a introducir en los artículos 677 y ss. del Código de 1928 fórmulas vagas, en las que el casuismo y la farragosidad se combinaban dando lugar a repeticiones innecesarias del tipo principal de coacción; los preceptos de referencia son de difícil lectura, y responden a la ideología del régimen que les dio la vida (según BARBERO SANTOS, el Código de 1928 posee una clara impronta totalitaria o fascista, ob. cit. p. 57). Por lo tanto, se pueden establecer paralelismos entre el Código de 1928 y el caso que nos ocupa, pues en ambos la impotencia y el temor del régimen ante las presiones sociales conduce a idénticas soluciones: reiteraciones inútiles y agravadas del tipo principal de coacción, ampliación de su ámbito admitiendo la intimidación y una mayor dureza en las penas.

(8) Véase HIGUERA GUIMERA, J. F., «El delito de coacciones», cit. p. 53: no cita este autor la fuente de donde obtiene esta información.

(9) Diario de sesiones de la Comisión de Justicia correspondiente a la sesión celebrada el 22 de junio de 1976, n.º 705, pp. 44 y 45.

(10) Así, la Procuradora Tey Planas, Diario de Sesiones de la Comisión de Justicia del día 22 de junio de 1976, n.º 705, p. 37. Recuérdese, además, que fue con motivo de la discusión de esta Ley cuando un grupo de procuradores pidió que se incluyera en el Código Penal una condena expresa a los grupos, asociaciones o partidos comunistas, nacionales o internacionales (véase el diario de sesiones del Pleno correspondiente a la sesión celebrada el 14 de julio de 1976, n.º 28, pp. 7-8).

(11) BOIX REIG, J., «Algunos aspectos de la responsabilidad civil subsidiaria», en Cuadernos de Política Criminal, n.º 3, 1977, p. 50.

(12) BOIX REIG, J., «Algunos aspectos...» cit. pp. 50-51; llega este autor a la conclusión de que, por esta razón, ni siquiera en los casos de daños y coacciones era aplicable el arresto sustitutorio por impago de multa gubernativa, considerando por tanto, que la responsabilidad personal subsidiaria fue definitivamente desterrada de la Ley de Orden Público por el Real Decreto Ley de 25 de enero de 1977.

(13) Sobre la cuestión de la reserva de ley en materia penal y de la improcedencia constitucional, en este tema, de la vía del Decreto-Ley puede verse el trabajo de BOIX REIG, J., «El principio de legalidad en la Constitución», en «Repercusiones de la Constitución en el Derecho Penal», Bilbao 1983, pp. 59 y ss.

(14) En este sentido, véase el trabajo de GOMEZ BENITEZ, J. M., «Crítica de la política penal del Orden Público», en Cuadernos de Política Criminal, n.º 16, 1982, pp. 55 y ss.

(15) ARROYO ZAPATERO, L., «Los piquetes de trabajadores en huelga...» cit., p. 456.

(16) ARROYO ZAPATERO, L., «Los piquetes de trabajadores en huelga...» cit. pp. 456-457.

(17) Véase COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTON, T. S., «Derecho Penal, Parte General», T. I-II, 3.ª edic., Valencia 1981, p. 331.

(18) Sobre el tema, véase MIRA BENAVENT, J., «El concepto de violencia en el delito de coacciones», Memoria de Licenciatura, inédita, pp. 66 y ss.

(19) HIGUERA GUIMERA, J. F., «El delito de coacciones», cit. pp. 52 y 55. En el mismo sentido, aunque no de un modo tan expreso como HIGUERA GUIMERA, véase RODRIGUEZ DEVE-SA, J. M., «Derecho Penal, P. E.» cit. p. 228.

(20) Véanse los Diarios de Sesiones del Pleno correspondientes a las sesiones celebradas los días 9 de junio de 1976 (n.º 27) y 14 de Julio de 1976 (n.º 28); véase también el diario de sesiones de la comisión de justicia correspondiente a la celebrada el día 22 de junio de 1977, n.º 705, pp. 35 y ss.

(21) Intervención del Procurador Madrid del Cacho (de la la ponencia), Diario de Sesiones de la Comisión de Justicia del día 22 de junio de 1976, n.º 705, p. 39.

(22) RAMIREZ MARTINEZ, J. M., «Huelga y cierre patronal en la Constitución Española», cit. p. 461.

(23) En el mismo sentido, ARROYO ZAPATERO, L., «Los piquetes de trabajadores en huelga...», cit. p. 445.

(24) OJEDA AVILES, A., «Derecho Sindical», cit. p. 311.

(25) RAMIREZ MARTINEZ, J. M., «Huelga y cierre patronal en la Constitución Española», cit. p. 461.

(26) MUÑOZ CONDE, F., «Derecho Penal, Parte Especial», 4.ª edic. Sevilla 1982, p. 171.

(27) Reproduzco a continuación, con algunas modificaciones, uno de los apartados (pp. 67-68) de mi Memoria de Licenciatura «El concepto de violencia en el delito de coacciones», inédita.

(28) MUÑOZ CONDE, F., «Introducción al Derecho Penal», Barcelona 1975, p. 49.

(28 bis) HIGUERA GUIMERA, J. F., «El delito de coacciones» cit. p. 273.

(29) ARROYO ZAPATERO, L., «Los piquetes de trabajadores en huelga...», cit. p. 448; véase también DURAN LOPEZ, F., «Derecho de huelga y legalización del conflicto de clases», cit. p. 153, nota 32.

(30) Sobre el tipo aplicable a aquellos piquetes que actúen por su cuenta y riesgo, véase MUÑOZ CONDE, F., «Derecho Penal, P. E.», cit. p. 171.

(31) Véase RODRIGUEZ DEVESA, J. M., «Derecho Penal, P. E.», cit. p. 290; para HIGUERA GUIMERA, «se es ajeno al conflicto cuando no se guarda ninguna clase de relación con la empresa en que se desarrolla ese conflicto» («El delito de coacciones», cit. p. 266).

(32) ARROYO ZAPATERO, L., «Los piquetes de trabajadores en huelga...», cit. p. 454.

(33) ARROYO ZAPATERO, L., «Los piquetes de trabajadores en huelga...», cit. p. 457.

(34) ARROYO ZAPATERO, L., «Los piquetes de trabajadores en huelga...», cit. p. 458. El paréntesis es mío.

(35) RAMIREZ MARTINEZ, J. M., «Huelga y cierre patronal en la Constitución española», cit. p. 461; en el mismo sentido, aunque con algunas reticencias al respecto, ARROYO ZAPATERO, L., «Los piquetes de trabajadores en huelga...», cit. p. 446 (Las reticencias en la p. 446, nota 13).

(36) RAMIREZ MARTINEZ, J. M., «Huelga y cierre patronal en la Constitución española», cit. p. 462; en el mismo sentido, aceptando los argumentos de RAMIREZ, véase ARROYO ZAPATERO, L., «Los piquetes de trabajadores en huelga...», pp. 445-456.

(37) En el mismo sentido, ARROYO ZAPATERO, L., «Los piquetes de trabajadores en huelga...», cit. p. 446.

(38) ARROYO ZAPATERO, L., «Los piquetes de trabajadores en huelga...», cit. p. 455.

(39) ARROYO ZAPATERO, L., «Los piquetes de trabajadores en huelga...», cit. pp. 455-456: Inconstitucionalidad de los nuevos tipos que comparto plenamente. A favor de la constitucionalidad, MORILLAS CUEVAS, «El derecho a la huelga y sus límites penales», Granada 1982, p. 183.

(40) Sobre el modelo de huelga regulado por el Decreto-Ley de 22 de mayo de 1975 y la pretendida atribución de un derecho subjetivo de huelga en dicho decreto, véase DURAN LOPEZ, F., «Derecho de huelga y legalización del conflicto de clases», cit. pp. 142 y ss.

(41) Como ya hemos visto, el mismo resultado se consigue hoy, una vez derogado el Decreto-Ley de 22 de mayo de 1975, con la aplicación del Real Decreto-Ley 3/1979 de 26 de enero, sobre protección de la seguridad ciudadana a los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496 del Código Penal: véase supra II,4.

(42) Véase MIRA BENAVENT, J., «El concepto de violencia en el delito de coacciones», Memoria de Licenciatura inédita, pp. 138 y ss.

(43) En este sentido, véase GARCIA-PABLOS DE MOLINA, A., «Sobre el delito de coacciones» en Estudios Penales y Criminológicos, VI, Universidad de Santiago de Compostela, 1983, pp. 116 y ss.; MIR PUIG, S., «El delito de coacciones en el Código Penal», en A. D. P. C. P. 1977, pp. 283 y ss.

(44) En aquellos casos en los que las amenazas condicionales tengan asignada una pena inferior a aresto mayor en su grado máximo, este argumento no es sostenible.

(45) MIR PUIG, S., «El delito de coacciones...», cit. pp. 302 y ss.

(46) MIR PUIG, S., «El delito de coacciones...», cit. p. 304.

(47) RAMIREZ MARTINEZ, J. M., «Huelga y cierre patronal en la Constitución Española», cit. p. 440.

(48) RAMIREZ MARTINEZ, J. M., «Huelga y cierre patronal en la Constitución española», cit. pp. 440 y 441.

(49) MUÑOZ CONDE, F., «Derecho Penal, P. E.», cit. p. 171. En el mismo sentido, aunque con algunas matizaciones, HIGUERA GUIMERA, J. F., «El delito de coacciones», cit. p. 271; y BAJO FERNANDEZ, M. «Derecho Penal Económico», Madrid 1978, p. 549: este autor, sin embargo, advierte los posibles riesgos de la desaparición de los párrafos 2.º y 3.º del artículo 496, pues «no hay que olvidar que la tipificación del ejercicio abusivo del derecho de huelga en los distintos preceptos comunes del Código Penal obliga a una interpretación judicial plena de condicionamientos políticos» (p. 549), corriéndose el riesgo de que se consideren las actividades huelguísticas como delitos de traición o sedición (p. 549 in fine).

(50) Véase por ejemplo las Sentencias de nuestro Tribunal Supremo de 3-XII-1934, Jurisprudencia Criminal tomo 131 n.º 276; de 24-XII-1934, J. C. tomo 131 n.º 358; de 16-1-1935, J. C. tomo n.º 132 n.º 34; de 19-XI-1935, J. C. tomo 135 n.º 100; de 12-XI-1968, J. C. n.º 1503; y de 20-XII-1973, J. C. n.º 1647.